



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIO DE PROMOCION DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINACIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

• MARCO NORMATIVO.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa, que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento de su objeto:

- **La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor**, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que, en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido en el caso de la Comunidad de Madrid dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Esta Ley Orgánica, así como la **Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid**, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos **la supremacía del interés del menor**.

- **La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- **La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.
- **La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia**, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.



En el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, se aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Estado hizo lo propio con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, los proyectos se enmarcan dentro de la Política Palanca 8 (PP8), Componente 22: "Plan de choque para la economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas e Igualdad e Inclusión". Dentro de este C22, la DGIFFN, ha presentado solicitud formal en la **línea de inversión I2**, proyectos 03 (Transformación Tecnológica de los Servicios Sociales), 04 (Proyectos piloto de innovación en Servicios Sociales) y 05 (Modernización, digitalización y capacitación de modelos residenciales de menores y jóvenes). El presente expediente se engloba dentro del proyecto 04, proyectos piloto de innovación en Servicios Sociales, **Subproyecto 53**, denominado **Proyecto Piloto de promoción del acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados**.

Por todo ello, resulta imprescindible la tramitación de este expediente de contratación para cubrir las necesidades indicadas en esta memoria:

- **NECESIDAD DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR.**

El principio general de la acción protectora de la infancia que consiste en la elección prioritaria del acogimiento familiar respecto del residencial, se encuentra limitado de forma muy significativa por motivo de la escasez de familias disponibles para el acogimiento de especial dificultad debido, de una parte, a la ausencia de profesionalización de las familias acogedoras, y de otra, a la disposición psicológica y emocional, inicial o sobrevenida, de los menores acogidos o susceptibles de serlo. Contar con un servicio de apoyo al acogimiento familiar serviría de acicate para el fomento de los ofrecimientos familiares de acogimientos para menores con especial dificultad, bien sea por edad o necesidades particulares específicas, suponiendo en muchas ocasiones, la única alternativa válida y posible para el mantenimiento del acogimiento familiar frente a los obstáculos de la relación, evitando el fracaso de la convivencia y un eventual cese traumático del acogimiento, con el consiguiente y no deseado reingreso del menor en un recurso residencial.

- **ESPECIALIDADES EN EL CASO DE LOS NNAEMNA.**

En España y también en la Comunidad de Madrid, la realidad de los niños y niñas migrantes que se encuentran sin acompañamiento adulto, está mayoritariamente asociada a los países del Magreb y en particular a Marruecos. Entre los motivos que llevan a estos niños y niñas a salir de nuestro país vecino, está la idea de crecer y madurar de forma transitoria o definitiva, en un contexto idealizado de mayores oportunidades. También están presentes otros desencadenantes como la desestructuración familiar y las dificultades que arrancan con la llegada de la adolescencia.

Igualmente llegan a Madrid menores de edad procedentes de países de África Subsahariana, con motivaciones diversas, relacionadas con la pobreza, escasas alternativas de emancipación, catástrofes naturales, guerra y persecución.



Madrid posee en su territorio una de las fronteras de mayor tránsito de España, el Aeropuerto Adolfo Suárez, que conecta con todos los rincones del mundo y desde donde se detectan una amplia diversidad de situaciones relacionadas con menores que migran sin acompañamiento.

La localización de niños, niñas y adolescentes migrantes sin acompañamiento familiar en territorio de la Comunidad de Madrid, se constituye para la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (DGIFFN) como una responsabilidad ineludible que impide posponer o demorar su atención y cuidado, entendiéndolo como un deber de máxima prioridad, teniendo en cuenta las circunstancias de especial vulnerabilidad que están asociadas a estos menores de edad y ofreciendo una respuesta de calidad que siempre pretende una solución duradera.

Su condición de menores es el eje primordial de toda actuación de acuerdo con la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia, que establece que *“los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley. Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.”*

Las estancias prolongadas en recursos residenciales, vividas de manera colectiva, pueden conformar una identidad ligada al grupo de iguales, con significado valor en plena etapa adolescente, que en ocasiones se ven alejados de los contextos de inclusión. Para muchos jóvenes, el acogimiento residencial puede recrear una visión excesivamente lúdica, que no compromete, ni requiere los límites propios que exige cualquier núcleo familiar en entorno comunitario, por lo que resulta más fácil integrarse en sociedad, desde una familia que desde el acogimiento residencial.

En toda la esfera político-legislativa, existe un amplio consenso a nivel mundial que concluye que la integración en sociedad, tiene mayor probabilidad de éxito cuando las etapas vinculadas a la infancia y adolescencia se desarrollan en contextos familiares, muy por encima de los contextos residenciales.

Inmersión en los códigos culturales de Marruecos.

Los datos de infancia migrante en Madrid, obligan a destinar una mirada estratégica a las familias de origen marroquí, y máxime cuando en los próximos años, se prevé un mayor aumento de su población adolescente.

Marruecos es un país con una amplia cultura migratoria. Casi todas las familias, cuentan con miembros que residen o han residido en Europa y el hecho migratorio, es vivido desde una elevada posición dentro de la escala de valores sociales.



Es impreciso e inexacto considerar que las familias abandonan a sus menores. Por lo general, todos los comportamientos migratorios a nivel mundial, obedecen a una misma ley y es que las familias siempre apoyan a sus miembros en aquello que es considerado como un valor.

Ciertamente, existe en el ideario colectivo de cada cultura migratoria, una construcción estereotipada de cómo se debe operar en cada uno de los escenarios relacionados con la migración y hasta la fecha, se entiende que se ayuda más, cuando los referentes familiares permanecen en el anonimato, apoyando a los menores desde la invisibilidad de las Instituciones.

En realidad, extrapolan una serie de vivencias con la “Administración”, normalmente alejadas de un rol de apoyo y por ello, será necesario fijar un interlocutor que pueda resultar significativo a la hora de poder explorar esta alternativa de protección.

En este contexto, se hace imprescindible una labor para explorar, en su caso formalizar, apoyar y evaluar el seguimiento, de cuantas alternativas de convivencia en contexto familiar se puedan impulsar, destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y por extensión a jóvenes extutelados en esa circunstancia.

La aprobación de este contrato mejorará considerablemente el desarrollo y la calidad de vida de estos niños, en un entorno familiar, facilitando así su proceso de integración educativa, social, cultural y laboral en la sociedad española, manteniendo los acogimientos existentes, así como impulsando nuevos acogimientos, siempre en beneficio de los menores protegidos.

En definitiva, lo que se pretende es revertir la situación actual, de forma que el acogimiento familiar se termine situando por delante del residencial y, por tanto, minimizar las resistencias que, hasta la fecha, impiden gestionar el cuidado de menores migrantes desde fórmulas más normalizadoras. En este sentido, se ha pronunciado concretamente la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia.

Teniendo en cuenta, por tanto, la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a menores extranjeros no acompañados con medida de protección, así como que la DGIFN no puede prestar con sus propios medios este Servicio, como oportunamente se motiva en los pliegos del que este informe forma parte, se hace necesario ofrecer una solución óptima, recurriendo a una contratación exterior para su ejecución por entidades con experiencia contrastada en la atención a este ámbito de población infantil.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato para la promoción del acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

En Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Fdo: Alberto San Juan Llorente

